

EL DISCURSO HEGEMÓNICO SOBRE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA

Gaya Makaran

Un día de estos, como tantos otros, desayunamos con las noticias, sea abriendo el periódico, sea mirando la tele, escuchando la radio o viendo páginas en internet. No importa mucho el medio, las noticias inquietantes sobre la cada vez más amenazada democracia latinoamericana nos cortan la digestión y amargan el café matutino. Los medios de comunicación de masas, forjadores de conciencias, casi nunca libres e independientes, herramientas de sus dueños —en su mayoría pudientes actores del juego político local y global—, suelen hablar el mismo idioma. Querer llegar más allá del discurso hegemónico significa sumergirse en el mundo subalterno de la información alternativa, de recursos limitados y, desgraciadamente, poco presente en la vida de un latinoamericano de a pie. ¿Qué nos dice sobre la democracia latinoamericana este discurso hegemónico descaradamente de derecha, “yanquizado” y neoliberal? ¿Cuál es la imagen del mapa político de América Latina que difunden los medios de comunicación masiva? Mirémoslo más de cerca sirviéndonos del ejemplo de Bolivia, país que en los últimos años está viviendo una verdadera transformación de su sistema político, económico y social.

Veamos una de tantas noticias que diariamente nos llegan desde Bolivia a través de los noticieros mexicanos: “Los ex mandatarios acusan al gobierno de Evo Morales de persecución política y violación de derechos humanos”¹. Sin entrar en detalles, se trataba de la controversia que suscitaba una nueva ley Juicio de Responsabilidades en vías de ser aprobada por el parlamento boliviano y que, según los ex mandatarios, serviría como herramienta de persecución política de todos los que no compartieran el punto de vista oficialista, sobre todo los gobiernos anteriores. Poco o nada se explicó sobre dicha ley, tampoco se dio protagonismo a las aclaraciones de la representante del gobierno, haciendo hincapié en las declaraciones de los mandatarios “perseguidos”, dando por supuesta su veracidad. No importó que en realidad la nueva norma no habría de ser en ningún caso retroactiva y los ex mandatarios, si este fuera el caso, sólo podrían ser juzgados conforme a la ley anterior, firmada todavía por Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex presidente hoy en día —ironías de

la vida— prófugo de la justicia boliviana. Tampoco se dio importancia al hecho de que dicha ley había sido pactada con la oposición, a pesar de la abrumante mayoría oficialista en el Congreso, y aprobada con su apoyo tras haber cedido algunos de sus puntos más importantes. Sin mencionar la obviedad de que cada país tiene derecho de ejercer sus leyes, en este caso anteriores al actual gobierno, y juzgar a los que las hayan violado, incluso a los dignatarios más elevados. La imagen que recorrió el mundo no dejó lugar a dudas: el gobierno “evista” hace maniobras sospechosas para socavar la tambaleante democracia boliviana.

Noticias como la mencionada, repetidas constantemente, pretenden convencer a la opinión pública de que los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina, sobre todo los más radicales, son antidemocráticos y si todavía no se han convertido en dictaduras, es sólo cuestión de tiempo, puesto que su naturaleza es autoritaria. Cualquier acción de estos gobiernos es mirada con preocupación mal fingida por los derechos humanos y la democracia, presuntamente violados y amenazados, mientras que si se trata de los gobiernos de la derecha conservadora esta agudeza visual se convierte en una miopía profunda e incurable. Así, por ejemplo, los mismos hechos son juzgados de manera diferente según la orientación política de sus protagonistas: las ansias reeleccionistas de Chávez tienen que ser un claro indicio de autoritarismo y las de Uribe, o se invisibilizan o se justifican por las difíciles circunstancias políticas.

Ahora bien, regresemos al caso de Bolivia y busquemos un poco en su historia reciente para revisar los pormenores de su democracia y confrontar los resultados con la imagen difundida por el discurso hegemónico. Nuestro viaje al pasado no será muy largo, pues empieza en los años 80, exactamente en el año 1982, cuando termina la época de las dictaduras militares y el país se encamina hacia la construcción de un régimen democrático liberal que pronto se unirá en santo matrimonio con el neoliberalismo económico. Eran los tiempos de privatizaciones (en Bolivia llamadas “capitalizaciones”), cuando del sistema del capitalismo estatal minero se pasó, sin más vacilar, al capitalismo del libre mercado, donde el papel del Estado se limitaba a asegurar las condiciones favorables para las inversiones extranjeras. El neoliberalismo que se autoproclamó único camino posible hacia el progreso, objetivo, racional y universal, resultó ser otra de las ideologías

¹ Véase, por ejemplo: *4 ex mandatarios piden juicio imparcial y denuncian injusticia* (http://www.laprensa.com.bo/noticias/18-03-10/noticias.php?nota=18_03_10_poli3.php) *Diplomáticos expresan preocupación por juicios a ex presidentes* (<http://ntnnews24.com/content/diplomaticos-expresan-preocupacion-juicios-a-ex-presidentes>), *Ley para enjuiciar a autoridades abre pulso entre Morales y sus antecesores* (<http://www.ntn24.com/content/ley-enjuiciar-a-autoridades-abre-pulso-entre-morales-y-sus-antecesores>).


equivocadas que llevó a la mayoría de la población boliviana al precipicio de la indigencia, empeorando las ya muy precarias condiciones en el campo, privándola de sus recursos naturales, produciendo miles de desempleados (en el lenguaje oficial llamados “los relocalizados”) al liquidar la industria nacional.² Aquella crisis económica iba acompañada por una importante falta de representatividad política, el poder se repartía a través de pactos partidarios y no por voluntad del pueblo; los presidentes se elegían en el parlamento y no en las urnas debido a que ninguno lograba conquistar la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta³; en un país de “indios”, el 99% de los diputados representaban la idiosincrasia criolla-mestiza, marginalizando a la mayoría nacional considerada “salvaje” y “retrasada”. A pesar de los innegables logros del movimiento indígena en las últimas décadas, como la fundación de los partidos políticos “indios”, introducción de sus representantes en el parlamento, reformas multiculturales a la Constitución, el Estado seguía siendo propiedad de la élite, dándole la espalda a la mayoría de los bolivianos y a sus reivindicaciones. Dicha “democracia” elitista, además de permanecer ciega ante las demandas populares, se empeñaba en reprimir los movimientos sociales y violar los derechos y libertades fundamentales de la población. Basta mencionar la política antidrogas de los gobiernos neoliberales, que no dudaban en atropellar los derechos humanos, reprimiendo, muchas veces con tortura y asesinato, a sus propios ciudadanos en nombre de las buenas relaciones con una potencia extranjera.⁴

Aquellas prácticas despertaron el espíritu rebelde de la población boliviana que, harta de soportar los abusos constantes de la élite, decidió luchar por descubrir el verdadero significado de la palabra democracia: *demos kratos*, el gobierno del pueblo. Acontecimientos como la famosa Guerra del Agua del 2001 y la Guerra del Gas del 2003⁵ además de ser un importante desafío para el sistema económico y régimen político vigentes, revelaron la verdadera cara de la “democracia” boliviana. Los levantamientos indígena-populares, antes que ser escuchados eran reprimidos con una desproporcional fuerza del ejército, dejando decenas de muertos y heridos, sin excluir mujeres y niños.⁶ La clase política se manchó la conciencia no sólo con la corrupción, despilfarro de fondos públicos, sordera ante las necesidades ciudadanas, sino, lo que más



Bolivia durante la Guerra del Agua

indigna, con la sangre humana, y todo en nombre de la defensa de la ley, el orden y la civilización de las hordas indias antidemocráticas. La misma élite política no dudó en expulsar al diputado Evo Morales del Parlamento en enero de 2002, con acusaciones mal fundadas sobre su presunta actividad terrorista y narcotraficante. Todo esto, ¡oh ironía!, en defensa de la ley y la democracia. Estos políticos lanzan hoy un grito al cielo, o mejor dicho, hacia la opinión mundial, denunciando la presunta persecución política de parte del gobierno “evista” y las maniobras antidemocráticas del presidente, subrayémoslo, el primero en la historia de Bolivia elegido y reelegido por la mayoría absoluta de votos en la primera vuelta y cuyo mandato goza de un inusual apoyo social.

No es mi objetivo defender a ningún gobierno. De hecho, creo que el papel de un intelectual es desconfiar de todo poder, señalando sus errores, condenando abusos e indicando posibles caminos a seguir. Los actuales gobiernos latinoamericanos de izquierda no están libres de defectos, algunos muestran incluso rasgos inquietantes, lo que no es de extrañar: el poder corrompe y el poder con el apoyo mayoritario e incondicional de la población, corrompe doblemente. Sin embargo, no son los anteriores gobiernos “democráticos” los indicados para juzgar a los mandatarios actuales, ni mucho menos acusarlos de autoritarios. Quizás en una sociedad sin memoria estas incriminaciones serían verdades, pero en las sociedades conscientes suenan más a pura hipocresía. Tal vez conviene preguntarse por lo paradójico que resulta el discurso hegemónico sobre la democracia latinoamericana, según el cual el gobierno democrático representa tan sólo a la élite, desatendiendo y reprimiendo los anhelos de la mayoría nacional, siendo una dictadura el poder fundado en los votos y la voluntad de las masas. ¿Es posible en nuestra América encontrar la razón perdida o estamos condenados a vivir en un “mundo al revés”, como lo llamaba Eduardo Galeano? 

² Véanse, por ejemplo, los datos del *Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008* del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).

³ Según la Constitución Política del Estado de 1967, reformada en 1994, el Presidente y Vicepresidente son elegidos mediante sufragio directo por mayoría absoluta. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos, el Congreso elige, por mayoría absoluta de sus miembros, entre los dos candidatos con el mayor número de sufragios.

⁴ La masacre de Villa Tunari (Chapare) en junio de 1988 a manos de la UMOPAR (Unidad Móvil de Patrullaje Rural, conocida también como “Los Leopardos”, fuerza policial anti-drogas financiada desde EU), dejó un saldo de 12 muertos, entre ellos varias mujeres y niños; y más de un centenar de heridos.

⁵ La “Guerra del Agua” empezó en abril de 2000 en Cochabamba, como respuesta a la privatización del agua, emprendida por el gobierno de Hugo Bánzer (1997-2001). La “Guerra del Gas” estalló en octubre de 2003 por la nacionalización de hidrocarburos y la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Bajo la presión del movimiento popular, el presidente tuvo que abandonar su cargo y salir del país, quedando el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert al frente del gobierno.

⁶ La mayor masacre de la “Guerra del Gas” se produjo el 11 de octubre de 2003 en la ciudad de El Alto, durante la violenta intervención del ejército. La acción provocó decenas de muertos y centenares de heridos, no sólo entre los “movilizados”, sino también entre la población “civil”.

Gaya Makaran. Polaca, maestra en Estudios Culturales, especialidad en Estudios Latinoamericanos por el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia; doctora en Humanidades, especialidad en Ciencias de la Literatura por la Facultad de Letras y Filología Moderna de la Universidad de Varsovia. Fue profesora de “Historia de América Latina” en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM. Es miembro de la Sociedad de Estudios Culturales de Nuestra América (SECNA).